

Universidad Nacional: Compromiso y libertad

Jaime Martuscelli

En estas palabras pronunciadas durante la ceremonia del Día del Maestro el pasado 14 de mayo, el doctor Jaime Martuscelli —Coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM— destaca la proyección nacional del quehacer de nuestra Universidad en todos los ámbitos del tejido social.

Es especialmente significativo compartir con ustedes estas reflexiones en el año en que celebramos el primer siglo de la Universidad Nacional. Cien años del inicio de una obra que recoge los anhelos humanistas del siglo XIX, y que fue concebida como la corona del proyecto educativo y como un instrumento para superar los grandes problemas nacionales. Así que espero que estén de acuerdo con este atrevimiento, pues bien podríamos auto-nombrarnos los Eméritos del Centenario.

La Universidad se ha reafirmado nacional, porque ha sido la máxima Casa de Estudios de los mexicanos, donde se han formado millones de profesionistas, porque ha logrado una importante presencia en el territorio nacional y por su solidaridad con las universidades públicas del país.

La creación de la Universidad en 1910 es resultado y ejemplo de persistencia. Cobraba vida la iniciativa que treinta años atrás había tenido Justo Sierra por crear una universidad pública, nacional y laica, condición esta última que se proponía por primera vez en la historia. La nueva institución, después de cuarenta y cinco años de ausencia, agruparía en un solo organismo a instancias que habían venido funcionando sin Universidad: la Escuela Nacional Preparatoria, las escuelas profesionales y los institutos científicos que serían coordinados por una nueva escuela.

La investigación en la nueva Universidad adoptaría una perspectiva articuladora de la realidad y por tanto incluiría a todos los campos del pensamiento. Así, para Justo Sierra y Ezequiel A. Chávez, la investigación que se llevaría a cabo en la Universidad podría tener distintas orientaciones y potencialidades de acuerdo con las necesidades y demandas a cumplir: atender su compromiso social y responder a los retos nacionales.

Esa capacidad ha cobrado especial relevancia desde que el conocimiento se convirtió en un factor productivo directo y fuente de la competitividad de los países en las relaciones económicas de la globalidad. Las naciones que han merecido mayores niveles de bienestar social son aquellas que han logrado ampliar su cobertura de educación superior y han destinado recursos crecientes para consolidar sus sistemas de ciencia y tecnología. Como alguien dijo: no se conoce ningún país que haya ido a la bancarrota por invertir en educación.

Es reconocido el valioso aporte que hace la UNAM para la integración de un sistema nacional de investigación y desarrollo. Al lado de las instituciones de educación superior públicas, que son las que llevan el peso mayor de la investigación, se requiere del compromiso del Estado para articular a los diferentes actores y niveles de acción.



El doctor Jaime Martuscelli en la ceremonia del Día del Maestro, 14 de mayo de 2010

El financiamiento público para la ciencia y tecnología va en contrasentido. Hoy se destina lo mismo que hace quince años y estamos lejos de lo que señala la ley respectiva. Tampoco hay una política de Estado de largo aliento y los presupuestos no superan el horizonte de un año, lo que imposibilita la planeación y establecimiento de metas a mediano plazo y la formación de recursos de alto nivel es muy limitado. Es urgente diseñar estrategias para revertir la tendencia que estas dimensiones tienen.

Es también fundamental destacar que la formación de la capacidad científica y la creatividad tienen como sustento la existencia de un contexto de oportunidades educativas y culturales. Pero, en el tiempo de la sociedad del conocimiento, México enfrenta la paradoja de que grandes segmentos de su población no tienen acceso y permanencia en el sistema educativo. El rezago educativo afecta a la cuarta parte de la población mayor de quince años (alrededor de 33 millones de personas), el analfabetismo lo padecen 6 millones de mexicanos, el 52 por ciento de los jóvenes han abandonado la escuela a los dieciocho años; la cobertura de educación superior para quienes tienen la edad de estar en este nivel de estudios apenas llega al 28 por ciento, y alrededor de 7 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. Estos indicadores de ignorancia, desigualdad y exclusión representan un serio desafío que tiene que enfrentarse en un esfuerzo colectivo.

Esas realidades son preocupantes e inaceptables, pues los efectos pueden ser graves, ya que apuntalan la desintegración del tejido social. Si reflexionamos sobre

las condiciones de vida que provoca la exclusión educativa, llegaremos a la conclusión de que esos espacios de socialización, donde se desarrolla la identidad, se fortalece la cohesión social, se amplía la confianza y se genera el conocimiento, están dejando fuera a millones de mexicanos, en su mayoría jóvenes, mujeres, pobres e indígenas, lo que contribuye a reforzar un circuito perverso de discriminación.

Una sociedad que aspira a tener mejor nivel de vida con calidad democrática necesita establecer acuerdos entre los grupos sociales, así como estrategias para generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos legalmente establecidos, pues la sola participación política no garantiza la creación de oportunidades. En este contexto, atender el aspecto educativo es de primera importancia, pues, como decía Justo Sierra: la educación es “matriz fecunda de las democracias vivas”. Y es así porque educar tiene el fin primordial de formar personas con responsabilidad social, con sentido ético, integradas a un conjunto de valores que hacen posible la vida colectiva, que incorporen sentimientos de solidaridad, tolerancia, respeto a la pluralidad y a la diferencia, condiciones necesarias para la democracia.

Si la exclusión educativa es en sí misma una amenaza a la vida comunitaria, las situaciones de desigualdad, inseguridad, impunidad y corrupción destruyen el sentido de colectividad, alimentando la incertidumbre y constituyendo una amenaza sobre todo para los jóvenes, quienes no pueden fundar una expectativa de vida digna ni encuentran estímulos a la acción organizada para la reconstrucción social y moral de la sociedad.

La Universidad Nacional, encabezada por el Rector, ha salido a la palestra para llamar la atención sobre lo que estos riesgos implican. Con la legitimidad que le otorga el ser la institución que aglutina al mayor número de jóvenes, se convierte en un protagonista insustituible para enarbolar la exigencia de reorientar la vida económica, social y política de México y restablecer los valores que hacen posible la vida ciudadana.

Uno de ellos es el reforzamiento de la condición de laicidad, condición necesaria para la democracia. Más allá de su referencia a la libertad de conciencia, implica el respeto a los derechos humanos de las minorías, que supone la no discriminación por ningún motivo. Es el reconocimiento de una sociedad plural con derecho a tener oportunidades educativas, laborales y culturales.

Hoy existen fuerzas que pretenden regresar a la sacralización de temas, territorios e instituciones, buscando imponer un fundamentalismo en el diseño de políticas públicas en educación, salud, cultura e investigación. La defensa de la educación laica se funda en la convicción de que ésta es condición necesaria para el desarrollo libre de los individuos y los prepara para que construyan su propia visión del mundo.

Resulta inaceptable que intereses de cualquier índole pretendan dictar a la investigación temas u objetos de estudio e inhibir el avance en campos de la ciencia que han tenido un desarrollo sin precedente, sin importarles que tales avances fundamenten la expectativa de mejorar la calidad de vida. Igual intolerancia se observa en relación con algunas manifestaciones artísticas y culturales.

Para la Universidad Nacional estos principios son irrenunciables. Esta Universidad nació laica y por ello desarrolló su capacidad de tolerancia, pluralidad, diálogo y solidaridad, logró una forma de ser, es decir una cultura que hizo posible su autonomía. Y ha sido la autonomía una garantía para detener los intentos de injerencia y subordinación por parte de diversos grupos ideológicos. Por eso laicidad y autonomía son inseparables en nuestra Universidad.

Qué duda cabe que la Universidad pública, y en particular la UNAM, será un espacio privilegiado en el que se deberán discutir con libertad y proponer, las diferentes alternativas del desarrollo nacional.

Qué equivocados han estado aquellos que han intentado vulnerar a la Universidad aduciendo argumentos insostenibles en un análisis serio. Pueden estar seguros de que tenemos Universidad pública para un buen rato. Y se demostrará que es precisamente ésta, con la fortaleza de sus valores, la única que puede contribuir a la reconstrucción del país. No hay instituciones más respetadas en México que nuestras universidades, que son apreciadas por la sociedad como uno de los pocos espacios dignos de la confianza ciudadana.

El historial de muertes y resurrecciones, como las llamó el maestro Edmundo O'Gorman, que sufrió nuestra Universidad entre 1833 y 1910 se ha ido y hoy tenemos una institución vigorosa con rumbo firme y liderazgo académico, que goza de un respeto social indiscutible. Así que preparémonos para los siguientes cien años que ahí estaremos atentos y siempre a su lado. Muchas gracias. **U**



El doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM, acompañado de los Profesores e Investigadores Eméritos en la Ceremonia del Día del Maestro, 14 de mayo de 2010

© DGCS/UNAM